



VISION DE LA RED RURAL ANTE LAS PROXIMAS ELECCIONES

Al concluir en los próximos meses el mandato del actual gobierno de la República del Paraguay (2018/23) y próximo a iniciarse otro de cinco años, la Red Rural pone de relieve en vísperas de las elecciones generales (30.04.23) la absoluta falta de interés del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez en mejorar durante su mandato la situación de la vida de familias campesinas, acosadas desde hace tiempo por la pobreza y en algunos casos por situaciones extremas, que esperamos y exigimos sean prioridad con medidas de urgencia del próximo gobierno.

Desde la caída de la dictadura, hace más de 34 años, los gobiernos de turno no realizaron intentos serios por solucionar los problemas del campo, pero en cambio se esmeraron en apoyar y alentar el aumento y la expansión de los agronegocios, con graves repercusiones sobre la estabilidad y el arraigo campesino, además de los atropellos a todas las leyes vigentes en materia de protección del ambiente y del hábitat humano.

La expansión de este tipo de negocios de extracción extrema ha puesto mayor énfasis en la desigualdad en cuanto a la distribución de la tierra en el Paraguay, lo que implica la desaparición de extensas áreas anteriormente cubiertas por bosques nativos y actualmente copadas por cultivos extensivos de soja y otros granos de origen transgénico.

Esta realidad provoca la expulsión de familias campesinas tradicionales y de poblaciones indígenas, lo que pone en serio riesgo de desaparecer la agricultura familiar campesina, hasta hace poco solamente en la región Oriental, pero ahora también en la Occidental, Chaco, que como se sabe cuenta con un frágil ecosistema.

En nuestro país, los recursos físicos más valiosos son la tierra y el agua. Ambos están prácticamente monopolizados en manos de pocas familias y de unas cuantas empresas transnacionales. En las explotaciones agrícolas mecanizadas, tanto como en los simples loteamientos, hay un alto índice de irrespeto a la ley y alto grado de corrupción en los organismos encargados de su control.

Mientras tanto, las autoridades extreman medidas para mantener criminalizados los reclamos campesinos y las luchas sociales en general, sin importar que las familias afectadas por la expansión de la frontera agrícola y la falta de tierras aptas para el cultivo, deambulen por las zonas de marginalidad urbana, si no optan directamente por la migración a otros países. Las únicas poblaciones rurales que se mantienen son las que se encuentran ubicadas en territorios no aptos para el cultivo extensivo, pero están conformadas mayoritariamente por los abuelos y nietos menores, hijos de los adultos que se vieron obligados al desarraigo por falta de oportunidad de trabajo y estudio.

Esto significa que, en las zonas no sojeras, la población económicamente activa está abandonando el campo y pasa a engrosar los cinturones de pobreza urbana, además de significar un abandono cada vez mayor de la agricultura familiar campesina, que es la tradicional fuente de alimentación en la zona rural. En muchos lugares los campesinos están comprando de los almacenes y supermercados los productos de origen vegetal que antes cultivaban y hoy ya no pueden hacerlo.

A ello debe sumarse el castigo que reciben con mayor énfasis en sus frágiles economías con la inflación de una economía cada vez más especulativa y orientada hacia grandes oligopolios apoyados por el Estado, como por ejemplo el de los supermercados, farmacias y laboratorios, y estaciones de servicios, que inflan escandalosamente sus precios para la venta de productos, algunos de ellos obtenidos de contrabando a gran escala.

Aunque la vida campesina tradicional está excluida de la dinámica del mercado, las familias rurales cada vez más están obligadas a realizar compras de los sectores urbanos, donde sus ingresos no valen nada. Las remuneraciones de la exigua fuerza laboral son, además de escasas, comparativamente inferiores a las de otros sectores mientras que los precios en los almacenes de las zonas campesinas son similares a los índices de la usura.

La única forma de intentar un freno a esta calamitosa situación es garantizando precios justos a los productos de la agricultura familiar campesina, de manera que el producto del trabajo de campo se pueda nivelar con los gastos propios del sostenimiento familiar. Sin embargo, el Estado da la espalda a los campesinos mientras libera a las inversiones extranjeras de la obligación de reinvertir sus ganancias en el país, razón por la cual casi nada queda del gran margen de renta que producen los agronegocios y las maquilas.

El gobierno que se va no demostró ningún interés en la recuperación de los 8 millones de hectáreas mal habidas (el tamaño de Panamá) durante la dictadura de Alfredo Stroessner como para pensar en una probable sensibilidad social de los líderes políticos del país. Todavía los herederos de la dictadura disfrutaban, sin muchas molestias, de esas tierras, en algunos casos mediante la protección de civiles armados autorizados a disparar a cualquiera, inclusive fuera de la jurisdicción de "sus propiedades".

Desde la caída de la dictadura, se tiene registros del asesinato de 124 dirigentes o activistas campesinos, para quienes nunca llegó la justicia. Hubo un intento, no atendido, de presionar a la clase política a tomar cartas en el asunto de las tierras malhabidas con la presentación de un anteproyecto de remover el registro de la Comisión de Verdad y Justicia que habla de los 8 millones de hectáreas de tierras públicas mal concedidas. Fue presentado por la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, pero transcurrieron años sin ser respondido.

Entre las personas que fueron adjudicadas con este tipo de tierras figura precisamente el padre (+) del actual presidente de la República, el también extinto senador oficialista y rico comerciante, Blas N. Riquelme, cuya familia sigue reclamando las tierras de Marina Cue, en Curuguaty, donde se produjo un enfrentamiento entre la Policía y campesinos sin tierras con un saldo de 17 muertos. Las tierras fueron donadas al Estado por su anterior propietaria, una empresa extranjera, pero los Riquelme aprovecharon su influencia política para apropiarse del lugar.

La realidad es que las poblaciones campesinas están abandonadas históricamente por los gobiernos de turno. Se encontraban también abandonadas durante la dictadura del general Stroessner y están abandonadas hoy por la democracia, en manos de la dirigencia política hereditaria. No se puede esperar grandes logros para ellas con un nuevo gobierno, pero desde la Red Rural persistiremos en los reclamos de hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes referidas a un verdadero desarrollo rural.

La Federación Nacional Campesina hizo el compromiso de apoyar a la Concertación de partidos y movimientos sociales y esperamos que, de llegar al gobierno, dicha alianza político-social se convierta en la herramienta de transformación con más educación y salud, así como también de trabajo y respeto al medio ambiente, que beneficie sustancialmente a las poblaciones rurales del Paraguay.

RED RURAL

Asunción, 20 de abril de 2023